

ABORTO

LEGAL EN EL

HOSPITAL

ACTO

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE | 16 HS

PLAZA PRIMERO DE MAYO, CABA

1917 | NÚMERO 9 | AÑO 1

EDITORIALES

3,8% DE INFLACIÓN (o \$170 el kilo de tomates)

\$50 pesos el kilo de papas. Lo vemos en la verdulería, pero lo corrobora el INDEC. La inflación de octubre fue la mayor del año, 3,8% (y 37,2% interanual). Todos los analistas auguran que la inflación de los próximos meses será similar. El aumento del 7%, único en el año, de los estatales y que instauró el gobierno nacional como pauta, habrá sido consumido en dos meses, sin contar los veinte puntos perdidos en los que va del año. La mala noticia es aún peor para los trabajadores, porque **el aumento de precios en el rubro alimentos fue 5% mensual.**

La aceleración del ritmo inflacionario da por tierra la esperanza del gobierno de que la suba de los dólares paralelos y financieros no repercuten en el nivel de precios. Se dan la cabeza contra la pared los economistas para quienes la recesión es incompatible con la suba de precios. Para éstos, si la demanda se contrae (y lo viene haciendo fuertemente) no hay lugar para que los precios crezcan, sino todo lo contrario. Así fue durante la recesión iniciada en 1998 y que terminó en la crisis del 2001. Sin embargo, los miles de millones de pesos que el gobierno ha emitido para subsidiar a las empresas (ATP, créditos subsidiados) han ido a parar rápidamente a la especulación y no a la inversión. En consecuencia, la producción se ha

retraído a niveles peores que los del 2002, mientras que el dinero circulante aumenta la inflación. Para paliar esta situación, el gobierno no ha tenido mejor idea que subir la tasa de interés y emitir nuevos bonos “dollar linked” es decir, atados al precio del dólar, por lo que sus compradores apuestan abiertamente a una suba ya no del paralelo sino del oficial para que su inversión sea redituable. Así no hay burgués que vaya a invertir (**¿para qué arriesgarse a producir cuando la bolsa reditúa más y sin mover un dedo?**).

La misión del FMI que visita a la Argentina ha sido recibida con una batería de medidas de ajuste. La primera de ellas, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria a la baja. Le sigue el descongelamiento de las tarifas acompañada del intento de reducir los subsidios. El anuncio del fin del IFE es un adelanto del **presupuesto cero para el combate de la pandemia** en 2021. Clarín titula (15/11) “¿El FMI ayudará antes o después de la devaluación?”

El verdadero plan que une a gobierno, oposición y FMI, sin embargo, ya está en marcha. Como en el 2003, esperan una recuperación a base de hundir los salarios, apoyados en la crisis presente, el aumento de la desocupación, la informalidad y las dificultades que la pandemia ha impuesto a la clase

obrero para organizarse. Se trata una reforma laboral *de facto*.

Los **\$50 del kilo de papas**, el alimento que se dice salvó a Europa del hambre, por su baratura, no son nada en comparación con los **\$175 el kilo de tomate** que junto a otros alimentos básicos, como el aceite o el resto de las verduras, encabezan el ranking de los que más aumentaron

¿Por qué señalamos la verduras (10% de aumento promedio sólo en un mes)? El mismo congreso que se apresta a votar la reforma jubilatoria o el presupuesto 2021 acaba de votar una ley de etiquetado de alimentos para combatir la obesidad; obesidad que en nuestro país acompaña, paradójicamente, la desnutrición: nuestros niños son obesos y están desnutridos al mismo tiempo, porque comen puro fideos, arroz y **alimentos ultraprocesados, que son más baratos, frente al**

creciente costo de carnes y verduras. Décadas de destrucción del ambiente para el avance de los monocultivos han impulsado campañas por una alimentación más natural, incluso por la defensa “política” del vegetarianismo y el veganismo. Pero... ¿puede discutirse la alimentación saludable si los trabajadores están condenados a comer cada vez menos verduras por su precio prohibitivo?

Un último dato y terminamos: el pan dulce, acercándose la navidad, sale un 55% más que en 2019 y ya se vende en cuotas. El IFE será reemplazado por una canasta navideña. El gobierno parece olvidar la enorme variedad de consignas y cánticos que las fiestas inspiran en los movimientos populares de nuestro país. Tal vez este diciembre se lo recordemos.

Cata Flexer

EDITORIALES

ABAJO LA MESA DE ENLACE MILITAR

La independencia política de los trabajadores no puede ser una consigna abstraída de la realidad política que la condiciona. Si la administración de los recursos con los que el gobierno de los Fernández debería haber tecnificado los hospitales y aumentado el sueldo de los trabajadores de la salud, en cambio, ha tenido como destino la cotización de los bonos de la bolsa, lo que sumirá al país en la mayor crisis económica de su historia, entonces, de todas formas, los trabajadores rechazamos todos los intentos de consagrar orientaciones políticas golpistas, derechistas, clandestinas y persecutorias como pretende serlo la mesa de enlace conformada por ex jefes del ejército y la policía Bonaerense. Aún en crisis, **en su debido momento, diremos alto al fuego contra el gobierno y apuntaremos unidos hasta que desaparezcan los dinosaurios.** Somos claros. En su momento apoyamos a Hadad contra Bolsonaro sin la mínima expectativa política en el progresismo brasileño, sino apoyados en la voluntad del pueblo. Bajo esa misma égida seguimos exigiendo su renuncia, tal como ahora rechazamos las provocaciones de Donald Trump contra el pueblo que sufragó en masa.

Nosotros, que consideramos que luego de incendiar las casillas de nuestros vecinos en Guernica Kicillof debe renunciar de su cargo, que Berni es el principal responsable de la desaparición de Facundo Castro, así y todo, **repudiamos a quienes colocan en el mismo escalón** los desbarranques capitalistas de un grupo desorientado en una crisis sin precedente que a los derechistas pretendientes de la representación política de los intereses del capital mediante las armas contra el pueblo. Nosotros, que tenemos en claro que bajo la dirección política de Kicillof y los Fernández Argentina va en camino a la miseria, de todas formas dejamos en claro que **estaremos presente en cada piquete y barricada contra cualquier intento de atacar las libertades democráticas** que los trabajadores argentinos conquistamos enfrentando a la dictadura militar.

La mesa de enlace es un organismo paraestatal que debe ser ya mismo llevado al banquillo de los acusados por conspirar contra el pueblo.

Maxi Laplagne



Nueva reforma jubilatoria + ajuste que con Macri

Escribe Cata Flexer

La reforma de los sistemas jubilatorios es una constante en el mundo desde hace tres décadas. El fin de los sistemas tipo AFJP es una de las principales demandas del movimiento revolucionario en Chile, y lo mismo sucede en las recientes movilizaciones contra el golpe en Perú. En nuestro país, las jornadas de diciembre de 2017 fueron la reacción a la reforma macrista que en su momento trató de desacoplar los aumentos de los jubilados de la recaudación (en ese momento en aumento), y representaron un punto de inflexión para el gobierno de Macri, que al año siguiente no pudo imponer una reforma laboral.

Los economistas burgueses agitan que las jubilaciones no son sostenibles porque ha aumentado la expectativa de vida al tiempo que se reduce la tasa de natalidad. Ocultan, sin embargo, tres cosas: 1) el aumento de la productividad del trabajo que permitiría que todos trabajemos menos y mejoremos el nivel de vida de la población, 2) el aumento constante del trabajo en negro, fomentado por el propio estado, bajo la tercerización y el monotributo y 3) fueron las propias reformas neoliberales menemistas las que eliminaron buena parte de los aportes patronales que debían sostener el sistema, los cuales no fueron reimpuestos por los “nac&pop”.

A partir del menemismo y durante buena parte del kirchnerismo, la pirámide jubilatoria se fue achatando: se congelaron las jubilaciones de quienes cobraban haberes más altos producto de mayores aportes y sólo aumentaba la mínima, de manera que cada vez más trabajadores fueron cobrando el haber mínimo, son hoy el 65%, y cobran alrededor de un tercio el valor de la canasta básica del jubilado. Recién a partir de 2008 se reestableció actualización de las jubilaciones para todas las escalas.

Lo que hoy se discute es bajo qué índice (de dónde sale el porcentaje) se van a actualizar los haberes. Durante 2020 se suspendió la movilidad por ley y los aumentos fueron dados por decreto; el gobierno se ahorró 72.000 millones de pesos. Y ahora una nueva reforma. La nueva ley propone que los aumentos sean cada seis meses (por la ley actual son cada tres) y se calculen con el promedio entre el aumento de los salarios (RIPTE) o el aumento de la recaudación de la ANSES más un 3%, pero de estos dos, se elige el más bajo. El objetivo es que los pagos de las jubilaciones no superen nunca lo recaudado por la ANSES, para, como dicen los funcionarios, “que sea sostenible” (para el Estado, no para los jubilados, claro). La modificación más grande es eliminar de la ecuación la inflación, para “desanclar” las jubilaciones (lo mismo que quieren

hacer con los salarios). Curiosamente, el macrismo había sacado de la ecuación la recaudación (en ese momento en alza) para meter la inflación (que venía bajando), ahora el kirchnerismo saca la inflación (que sube) para poner la recaudación (que baja).

El oficialismo sostiene que es la misma fórmula que se usó hasta el 2017. Falso por dos razones: la escalada inflacionaria no es comparable a buena parte del período de vigencia de la ley previa, sumado a que los salarios hoy no crecen, y la ley actual pone un techo que la anterior no tenía. Antes se calculaba por el promedio de RIPTE y recaudación, ahora de éstos se elige el menor, lo que garantiza que siempre esté por debajo de la recaudación. Pero además de que pone un ancla a las subas (y no un piso), es el propio gobierno el que se ocupa de desfinanciar a la ANSES. Por caso, actualmente rige como beneficio para las patronales el no pago de los aportes patronales como forma de subsidio estatal por la pandemia, pero el Tesoro no repone esos aportes que perdona a los empresarios.

La clarificación del contenido reaccionario de esta ley es nuestra principal herramienta para mostrar a los trabajadores el ajuste en curso. Como en el 2017, en base a esta claridad tenemos que movilizarnos masivamente contra la nueva reforma jubilatoria.

CRECEN LAS LUCHAS OBRERAS

Escribe **Felipe Gonzáles**

La cosa está picante. Si te pones a pensar, después de los quince días de cuarentena real marzo, en adelante, el mundo entero no habló de otra cosa más que del virus pero en las fábricas la producción no paró un minuto. Un sacrificio obrero desmedido que por parte de los gobernantes será respondido con inflación de cincuenta puntos, paritarias de siete, reducción de haberes jubilatorios y la extorsión de que “si no te gusta, andate, total hay veinte millones de desocupados que van a querer laburar barato”.

Las empresas se llevaron los subsidios pero no se compró una máquina. Qué digo máquina, ni un tornillo. A pesar de recibir miles de millones de dólares, las empresas siguen despidiendo en masa bajo la excusa de la quiebra. Las que se van del país no rinden cuentas de lo que se llevaron en tantos años. No es casual, entonces, que la bronca acumulada se está empezando a expresar con ocupaciones de fábricas como en Gri Calviño, Gotan o La Nirva, todas ellas en defensa de los puestos de trabajo. En Zona Sur se gestaron asambleas históricas en fábricas gigantes como Rigolleau para discutir protocolos. En el norte los obreros luchan heroicamente contra las patronales

de la Seabord y varias otras fábricas, lo que al sur se contagia con ocupaciones en Chubut y Río Negro.

Los pibes de las apps. No hay día que no se movilicen por mejores condiciones de trabajo conscientes de que los kilómetros pedaleados en pandemia fueron pagados con migajas. Así en todos los rubros, con judiciales camino al paro nacional, docentes luchando en masa por la defensa de la virtualidad o empleados del parque de la costa dándole al bombo para que se respete su laburo.

El método, siempre el mismo, el único que existe, la asamblea, el volante, el paro, la huelga y la difusión por medios digitales. En ese camino, los trabajadores de la salud le impusieron, lease bien, sí, le impusieron, no le exigieron, un paro nacional a la burocracia de los médicos municipales de la Capital. El 17, ahora sí, apoyaremos la primera gran huelga de los obreros de clínicas y hospitales. Imitemos. No le rogamos nada a la CGT ni a ningún burócrata. Nos organizamos con el compañero de trabajo como podemos, coordinamos con los de otro sector, levantamos la bandera y exigimos salario y condiciones laborales dignas de un obrero argentino.

NO BAJAMOS NINGUNA BANDERA

Aborto legal, seguro y gratuito

Compañeros, escribo este texto en la creencia de que han captado tanto como yo un problema que madura al interior del movimiento que lucha por la legalización y aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo. Colgados de la profundidad histórica de la crisis que atraviesa al mundo, quieren instalar que se ha transformado en un problema secundario la lucha por el aborto legal.

Falso. Al contrario de lo que quieren hacernos creer, el crecimiento exponencial del hambre y la miseria acrecientan la necesidad de legalizar el aborto sobre todo cuando la aceleración de los niveles de desocupación se han elevado exponencialmente en un año dónde ningún adolescente del país pudo contar con sus clases presenciales de educación sexual ni, mucho menos, existen condiciones financieras para garantizarles psicólogos y ginecólogos de calidad.

La aprobación del aborto legal disminuiría considerablemente el trabajo de los hospitales porque se restarían los miles de casos anuales de hospitalización por la realización de abortos clandestinos.

Sí, el aborto legal requiere de una partida presupuestaria propia para que sea realmente aplicable. Sería, en todo caso, una partida presupuestaria general a los hospitales incompatible con los miles de millones de dólares pagados a los acreedores privados de la deuda.

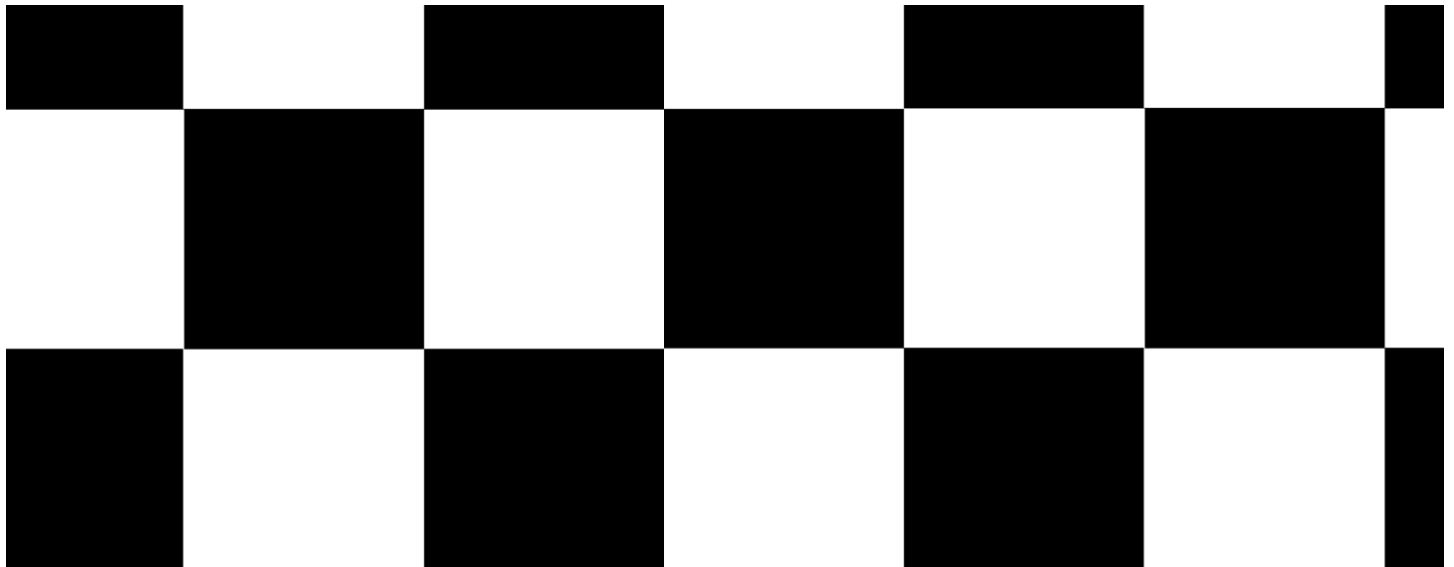
Su aprobación abriría puestos de trabajo porque se habilitarán centros públicos de atención para que la mujer que acceda a la decisión pueda antes contar con todo el apoyo que la sociedad le pueda brindar. Se abrirán las licitaciones para la construcción de centros integrales para los problemas femeninos e infantiles en general.

La aprobación del aborto en el Congreso reduciría el gasto de millones de pesos en fármacos de empresas que lucran con los componentes químicos del misoprostol, el cual debería pasar a ser producido por el mismo Estado a la vez que se implementan e investigan nuevas formas de investigación anticonceptiva.

Pero, con la legalidad del aborto, sobre todo, se cortaría un símbolo histórico de dominación política contra la mujer y los oprimidos en general.

Desde 1917 convocamos a la realización masiva de actos, pañuelazos, piquetes, barricadas y movilizaciones en defensa de la aprobación del proyecto presentado por la Campaña Nacional del Aborto, el cual consideramos debe ser tratado antes del 31 de diciembre de 2020.

Maxi Laplagne



ESPERANDO LA VACUNA

Escribe **Cata Flexer**

Europa está ya en la segunda ola, mientras la primera no parece tener fin en la Argentina, al pasar el pico en el AMBA pero se desarrolla la epidemia en el interior, especialmente en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario y Tucumán. Frente a este panorama, la esperanza ha llegado en la forma de varios anuncios sobre el avance de las investigaciones en curso para producir vacunas.

Iremos al grano, ya en [otra nota](#) hemos profundizado sobre el negocio de las vacunas, sin dejar de señalar todo su potencial. Actualmente hay once vacunas en la última fase de experimentación (III, con decenas de miles de voluntarios), y de hecho algunas ya se aplican a personal de salud y militares de Rusia, China y Emiratos Árabes. La tecnología que utilizan estas potenciales vacunas

son varias, pero las que han mostrado más potencial son dos: las de vector viral (AstraZeneca-Oxford, Sputnik V, Johnson y Johnson, CanSino) y las de ARNm (Moderna y Pfizer). Ambas entran dentro de la categoría de “genéticas” (para diferenciarlas de las vacunas tradicionales de virus inactivados o atenuados) pero las de vector viral llevan dos décadas de estudio y existen algunas aprobadas para otras enfermedades (de hecho los equipos de Oxford y Gamaleya desarrollaron esta tecnología para vacunas contra el Ébola), mientras que todavía no existe ninguna vacuna probada para humanos de ARNm.

La novedad de la semana es que se han conocido los resultados preliminares (todavía no fueron publicados en revistas especializadas para ser

evaluados por otros científicos) de la vacuna de Pfizer y la Sputnik, con un 90 y 92% de eficacia respectivamente (una vacuna se considera útil si supera el 60%). Excelente novedad, si se corroboran los datos. Pero entonces nos enteramos ahora que el problema no es sólo el descubrimiento de una vacuna, sino que tenemos al menos otros tres problemas:

1) La logística. Todas estas vacunas necesitan de una cadena de frío, que en el caso de la Pfizer (y la de Moderna) implican temperaturas de -70°C (muy muy frío, no alcanza con un los freezers comunes que tienen los servicios médicos. De hecho, han subido exponencialmente las acciones de dos compañías que fabrican los medios para mantener el frío. En fin, Argentina no tiene los medios para poder garantizar la cadena de frío de estas vacunas.

2) La disponibilidad. Todas estas vacunas ya se están produciendo a la espera de que sean aprobadas (claramente son un negocio, porque las farmacéuticas se arriesgan a perder millones de dosis). Aún así, la producción no alcanza. Las grandes potencias ejercen una política de imperialismo de la vacuna, acaparan para sí la mayor parte de las partidas. Por esta razón todos los estados se lanzaron a hacer acuerdos de compra previa, como hizo Argentina con AstraZeneca y Rusia. Además, la duración de la inmunidad (aún no probada) es limitada, por lo que habría que seguir vacunándose regularmente. Hay que agregar que algunas compañías estarían vendiendo la vacuna “al costo” (el real nunca lo sabremos) mientras dure la pandemia a la que le han puesto fecha de vencimiento a mediados de 2021. Así, una vacuna que hoy valdría 4 dólares puede valer 40 en pocos meses (el precio a la que venderá Pfizer, que tiene menos escrúpulos de los investigadores de Oxford).

3) Lo más importante ¿funcionará? En caso de que la eficacia no sea tal incluso si tiene efectos adversos a largo plazo, los costos humanos y económicos los pagará la población. La emergencia sanitaria ha hecho que se salten muchas etapas que normalmente se seguirían a la aprobación de una vacuna, que suele llevar años porque se deben hacer estudios de seguimiento a largo plazo. A esto se agrega que ante los efectos adversos las demandas deberán realizarse bajo la jurisdicción que elijan las compañías. Quienes escribimos en 1917 apoyamos abiertamente la vacunación obligatoria (y gratuita) de toda la población, sin embargo, señalamos que la seguridad de vacunas y fármacos debe poder ser estudiada por el conjunto de la comunidad científica. Las leyes de patentes hacen que la fórmula de las vacunas sea secreta, salvo para las autoridades regulatorias, de modo que los científicos solamente conocen la investigación sobre los efectos, pero no conocen cómo se hace la vacuna. Exigimos, por lo tanto, que todo el proceso de investigación sea público para que la comunidad científica pueda trabajar de conjunto para el progreso de la humanidad, cosa que las leyes burguesas prohíben porque anularía el monopolio de los laboratorios privados sobre sus formulaciones, que podrían ser replicadas por cualquier laboratorio público.

Por último, debemos señalar que los anuncios de la (posible) llegada de la vacuna a la Argentina, han sido el telón de fondo para que el gobierno levante tanto las medidas de aislamiento como de ayuda social por la pandemia, al punto de no incluir una sola partida para combatir la enfermedad en el presupuesto 2021.



EL GOLPE DESPERTÓ LA REVOLUCIÓN PERUANA

Escribe **Martina Kleijzer**

Lima, pero también el resto de las ciudades y provincias de todo el Perú, acaban de vivir una semana de carácter realmente histórico en el que la destitución golpista del presidente Vizcarra, una aventura política de la

derecha, las universidades privadas y los bancos, elevó al máximo las tensiones sociales preexistentes y acabó en una insurrección popular de masas, una huelga nacional en los hechos de los trabajadores de la salud, la renuncia (por

ahora) de once ministros ejecutivos, la posible salida efectiva e inmediata del poder del usurpador Merino y la disposición multitudinaria a la convocatoria de una asamblea constituyente soberana que reemplace la constitución neoliberal fujimorista aprobada en los noventa mediante la represión y la persecución del ejército. Al trastocar todos los aspectos de la sociedad, la pandemia hace estallar sus fibras más íntimas. El menor accidente político acaba en la gestación de procesos revolucionarios.

Como sucedió en Brasil, Bolivia y Paraguay, existen sectores políticos que rechazan la calificación de los sucesos peruanos como un golpe de estado, avalándose en que la salida de Vizcarra se da por medios establecidos mediante la constitución. El Partido Comunista, por ejemplo, que encabeza la Confederación General de Trabajadores del Perú fue más lejos y una semana atrás declaraba que lo que sí hubiera significado un golpe de estado no era la salida de Vizcarra, sino sus intenciones de seguir en el poder. Es decir que de derecha a izquierda todo el régimen apostó al golpe polarizando al Perú entre los gobernantes capitalistas de un lado y el pueblo del otro.

En términos constitucionales el dilema político sobre el golpe no tiene solución porque el parlamento se apoya en sus propias reglas para destituir a un presidente que, también, había llegado al poder bajo maniobras políticas del estado

con el objetivo de salvar a un régimen que se venía abajo por presidentes repletos de denuncias de corrupción. Pero en términos realmente políticos **la destitución de Vizcarra es un golpe de estado contra la voluntad popular**, con el apoyo de las fuerzas armadas dispuestas a asesinar, el saludo del imperialismo y de sus presidentes títeres como Piñera y Bolsonaro.

Que es una «guerra entre neoliberales» no quedan dudas. También el pueblo lo tiene en claro y por ello **la exigencia masiva no es la vuelta de Vizcarra al poder, sino la convocatoria a una asamblea constituyente**. Pero dicho esto, vale preguntarse por qué la derecha se lanzó a esta aventura ante la cual no esperaba ni un cuarto de la reacción generada. La asunción de Vizcarra se había significado en el 2018 la respuesta del régimen fujimorista al ascenso masivo de movilizaciones estudiantiles y femeninas que en determinadas circunstancias llegaron a coincidir con huelgas mineras, una fusión que en el país de Mariátegui aterraría a cualquier oligarca. A los casos de corrupción relacionados con *Odebrecht* que generaron la salida del presidente Pablo Kuczynski, el régimen peruano respondió con Vizcarra como un abanderado del indigenismo, las políticas de género en el estado y, aquí la cuestión crucial, el personero que llevaría a cabo la anulación definitiva de la ley de educación nacional fujimorista defensora acérrima de la privatización educativa.

Como en Chile y Argentina los grandes bancos (sobre todo el *Santander*) son ellos mismos los accionistas y defensores de la privatización educativa, ya sea con el desarrollo de universidades totalmente privatizadas o el arancelamiento de posgrados. Bajo ese programa, Vizcarra había podido sostener un determinado apoyo popular con el que inició la gestión de la pandemia aplicando una cuarentena que se desintegró de forma acelerada cuando el coronavirus dejó ante las vistas del mundo un sistema sanitario obsoleto, con cadáveres acumulados en las calles y, aún así, una crisis política con personeros recorriendo los palacios de justicia a diario y el rescate incalculable desde el Estado a las mismas empresas cómplices de la corrupción. En relación a su «progresismo» dejemos en claro que Vizcarra él mismo en persona decreto el cierre de las fronteras para los exiliados venezolanos. Cuando las masas peruanas denuncian un golpe de estado denuncian el método de gobierno de un régimen agotado. Por definición, la democracia fujimorista se ha vuelto golpista contra el pueblo.

En todos sus comunicados, los golpistas hacen explícita referencia a que su objetivo es hacerse cargo de la gestión de la crisis sanitaria, esto es, reventar cualquier tendencia al aislamiento y la prevención mientras toda la economía peruana vire al salvataje del gran capital en crisis. Virar aún más a la derecha en un país donde los cadáveres se amontonan es una declaración

explícitamente fascista. Es decir que los golpistas adelantan la declaración de guerra contra el cuidado de la vida del pueblo en el momento en que la curva de la pandemia solo crece. En este sentido, la crisis política **solamente aceleró las condiciones preexistentes de un estallido revolucionario**. En apenas cuatro días las manifestaciones se expandieron de Lima al Amazonas y la Cordillera, se ocuparon e incendiaron comisarias y autos policiales de a decenas, se conformaron barricadas y asambleas populares y hasta los más reconocidos artistas y periodistas se vieron obligados a pronunciarse por la salida inmediata de Merino del poder. Cualquiera que analice mínimamente los sucesos, sus consignas y sus predisposiciones ve que se trata de una rebelión popular que acaba de comenzar y que, sobre todo, pone en boca de la gran masa de la población el rechazo a un régimen político de gobierno mediante el cual la salud, la educación y las condiciones básicas de existencia de las masas se vuelven inalcanzables. La crisis pone en discusión décadas de explotación y con ello, a su tiempo, la propia naturaleza del régimen capitalista. La clase obrera peruana es una clase experimentada en su crítica al régimen de la plusvalía y el consumo por más que «las nuevas izquierdas» pretendan negar su historia de lucha.

La novedad más importante del proceso se encuentra en su masividad y en la participación activa (e incipiente) de

sectores organizados de la clase obrera, como los trabajadores de la salud y los mineros. Que las ideas revolucionarias golpeen entre las grandes masas es una novedad que recorre al mundo y que, en Perú, modifica radicalmente la forma en que se ha expresado la lucha de clases de las últimas cinco décadas. Desde los ochenta y hasta los dos mil la vanguardia revolucionaria del Perú orientó sus fuerzas a las acciones foquistas y guerrilleras, con avances y retrocesos, con momentos de alta tensión civil contra el poder, pero, en fin, con una política de propaganda alejada de las urbes proletarias y en muchos casos enfocadas solamente en la cuestión campesina e indígena del Perú. La actual situación, en cambio, hace de la masa obrera urbana la propia protagonista de su devenir político. La constituyente expresa en términos teóricos lo que sucede «por abajo»: los obreros se vuelven protagonistas de su propia democracia y vida política, proceso que por allí fue denominado como *creación heroica del proletariado*. Las perspectivas para la deliberación política son imponentes.

En último lugar de orden, pero quizá primero en importancia, el estallido peruano comienza lentamente a completar el álbum de los países latinoamericanos (aunque también de

estados yanquis) sublevados. A esta altura, la ley de la cantidad ya debe ser tomada en cuenta, porque no es lo mismo un estallido social aislado en el tiempo del resto del mundo que un levantamiento con exigencias constituyentes a un año de las jornadas revolucionarias en Puerto Rico, el levantamiento obrero y campesino en Ecuador, las disposiciones del pueblo boliviano a enfrentar el golpe, las insurrecciones permanentes en Haití y, por supuesto, la revolución chilena con la cual el Perú comparte casi mil quinientos años de desarrollo paralelo. Una campaña internacional por la victoria de la revolución latinoamericana cada vez obliga a la postulación de un programa internacional, al estudio minucioso del desarrollo y agonía del sistema de explotación capitalista en todo el continente y, sobre todo, a la iniciativa política por parte de los explotados para que las comprensiones den lugar a la práctica de un nuevo mundo.

Abajo el golpe en Perú. Por una asamblea libre, constituyente y soberana elegida con el voto popular. Salario digno y jornada de seis horas de trabajo para los trabajadores de la salud. Dinero para erradicar el coronavirus y no para las contratistas corruptas. Justicia por los asesinados en la revuelta y libertad a todos los presos políticos.